

**Jonas Wolff**

**Movimientos sociales y la lucha  
por la democratización de la democracia:  
experiencias recientes en América del Sur**

**1. Introducción<sup>1</sup>**

La estabilidad de la democracia en países caracterizados por marcadas desigualdades sociales requiere, entre otras cosas, que sectores sociales marginados cuenten con capacidades reducidas de movilización, articulación e incidencia política. Al mismo tiempo, esa relativa discriminación política obviamente atenta contra principios básicos de la democracia: principios como la participación justa y la representación equitativa. En los últimos años, distintos movimientos sociales en América del Sur lograron superar los obstáculos a la acción colectiva, reivindicando mayor presencia e incidencia política. En el presente ensayo se compara tres experiencias recientes: los movimientos piquetero en Argentina, indígena en Ecuador y campesino-indígena en Bolivia. Los tres movimientos sociales, en ciertos momentos, han sido capaces de desafiar a los regímenes democráticos para lograr una apertura política. En los tres casos, el ascenso de “nuevos” sujetos políticos ha conllevado tanto una desestabilización (temporal) de la democracia como un impulso importante de democratización, pero los éxitos más estructurales en términos de una “profundización” de la democracia son bastante diversos. La pregunta es: ¿En qué medida –bajo qué condiciones y con qué estrategias– han contribuido los movimientos sociales a una democratización de la democracia en sus países correspondientes?

Tanto el punto de partida general como la pregunta concreta sólo tienen sentido desde la perspectiva de un concepto de democracia

---

1 La presente contribución se basa en una presentación en el taller internacional “El Bicentenario de la Independencia y la(s) Democracia(s) en América Latina: Balance y Perspectivas”, 12-13 de febrero de 2010, Lateinamerika-Institut, Freie Universität Berlin. Agradezco los comentarios de varios participantes del taller, los editores de este libro y Niels Graf.

específico. Tomando en serio la idea de la democracia realmente existente como poliarquía (Dahl 1989; Lindblom 1977), tal democracia formal siempre queda lejos del ideal, pero puede aproximarse más o menos a este.<sup>2</sup> Así se puede distinguir la pregunta por la existencia (formal) de la democracia, de la pregunta por su calidad. Y, con ello, no es una contradicción en sí misma decir que la estabilidad de una determinada democracia (formal) puede depender de su limitación factual en términos de capacidades reales de participación y representación. Del mismo modo es así posible hablar de y analizar procesos de democratización (o profundización) de la democracia.

En el marco de este artículo no es posible analizar y comparar en detalle las experiencias y resultados de los tres movimientos sociales mencionados. La idea es más bien poner a debate cuatro observaciones generales que se basan en estas experiencias.<sup>3</sup> Primero, se confirma la tesis planteada por Sidney Tarrow (1998) de que el resultado más probable de movimientos sociales exitosos en un sistema democrático es un ciclo de reformas – pero el caso boliviano demuestra que, bajo condiciones especiales, tales reformas pueden ser bastante profundas. Segundo, los casos de Argentina y Ecuador, sin embargo, demuestran la dinámica más típica: haber entrado como fuerza minoritaria en procesos e instituciones políticos para transformar las reglas de juego, siendo más bien las reglas de juego las que al final transforman al movimiento social y sus representantes. Radicalizando esta observación se podría argumentar, tercero, que cierta ruptura institucional es necesaria para abrir posibilidades de cambios políticos que sean más estructurales. Las experiencias de los gobiernos de Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador) pa-

---

2 Aunque tal aproximación no es un proceso lineal que se puede analizar en términos de más (democracia) o menos (defectos). El problema de fondo aquí es que la democracia es siempre un ensamblaje de principios contradictorios (por ejemplo, el principio de la soberanía popular versus su limitación constitucional).

3 En este sentido, las cuatro observaciones desarrolladas recurren empíricamente a una investigación académica que se basa en estudios de casos sistemáticamente elegidos, analizados y comparados (con metodología clara y explícita) (Wolff 2008; 2009). Pero no representan, en rigor, el resultado de esta investigación sistemática (que tenía otra pregunta). La idea del presente ensayo es más bien identificar unos rasgos generales para ponerlos a debate como tesis muy preliminares. Bajo esta reserva, la selección de los tres casos sí tiene mucho sentido con respecto al tema de este artículo (véase la introducción al capítulo 3).

recen confirmar esta tesis, pero también sugieren una cuarta observación que choca abiertamente con el discurso de democracia de base que caracteriza a los movimientos sociales analizados: La fuerza y el éxito político de los movimientos, al menos en una parte importante, dependen de líderes fuertes que son capaces de unir a movimientos, organizaciones y grupos sociales heterogéneos bajo un proyecto político.

Estas cuatro observaciones no resultan en una respuesta clara, sino en más preguntas. A modo de conclusión, se propone sistematizar estas preguntas retomando el concepto de las “escalas de justicia” propuesto por Nancy Fraser (2009). Siguiendo a Fraser, se puede analizar las demandas y los éxitos de los movimientos sociales en tres dimensiones sustanciales de justicia (redistribución, reconocimiento y representación) y con respecto a diferentes niveles geográficos hacia donde se puede dirigir y donde se debe tratar las reivindicaciones (del nivel local hacia el nivel global). Pero antes de presentar las cuatro observaciones y la conclusión-interrogante, es preciso resumir brevemente tanto el contexto político en el cual se forman los movimientos sociales como los propios ciclos de movilización.

## **2. El contexto: el “triángulo” latinoamericano**

La “tercera ola de democratización” (Huntington 1991) en América Latina ha dado lugar a una situación política que se caracteriza, en términos muy generales, por una estabilidad básica de la democracia. Ya con respecto a la “década perdida” de los años 1980, Karen Remmer enfatizó que el enigma no es “la fragilidad de la democracia, sino su vitalidad sorprendente a pesar de restricciones económicas tan severas” (Remmer 1990: 335). Las experiencias de la nueva “media década perdida” entre 1998 y 2002 (Ocampo 2002) corroboraron esta observación: En países como Argentina (2001/2002) o Ecuador (1999/2000) crisis económicas muy dramáticas provocaron una escalada de conflictos sociales y acabaron también en serias crisis políticas, pero sin que se produjera una ruptura del régimen democrático (Wolff 2008).

Cuando hablamos de una estabilidad básica de la democracia en América Latina, hablamos de una estabilidad democrática bastante

particular. Por un lado, investigadores –y los diferentes índices que intentan medir la calidad de la democracia– enfatizan los “defectos” de los sistemas democráticos latinoamericanos, sobre todo con respecto al estado de derecho, el control horizontal de los poderes estatales y el sistema de partidos. Por otro lado, hay que mencionar la situación socioeconómica que se caracteriza, en general, por la persistencia de pobreza masiva y desigualdad profunda. Así el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*, sintetizó esta “nueva realidad sin antecedentes” en la imagen de un “triángulo” que tiene como vértices la democracia electoral, la pobreza y la desigualdad (PNUD 2004: 36).

Sin entrar en detalles del debate sobre cuestiones de teoría de la democracia, basta decir que la persistencia de pobreza masiva y de múltiples desigualdades sociales implica que la democracia *es y sigue siendo* una democracia bastante formal. No es sólo que la extensión de derechos políticos en la región no fuera acompañada –ni seguida– por un fortalecimiento de derechos sociales (Oxhorn 2003: 36). Es más: que el ejercicio real de los derechos políticos y civiles queda muy lejos de la norma formal tiene que ver, entre otras cosas, precisamente con el estado muy precario de derechos sociales de ciudadanía.

Grupos sociales que son marginados en términos socio-económicos se caracterizan, normalmente, por tener reducidas capacidades de movilización, articulación e incidencia política. Y al revés: grupos privilegiados social y económicamente tienden a tener ventajas tanto en su capacidad organizativa como en su acceso al sistema político (Offe/Wiesenthal 1980; Lindblom 1977). En este sentido se puede entender la observación de Carlos Strasser que argumentó que el triunfo mundial de tanto la democracia como la desigualdad al fin del siglo XX indica que ambos están ligados en una “asociación perfectamente posible” (Strasser 2000: i). En estas condiciones, democratización (o profundización) de la democracia requiere precisamente la reducción de tales asimetrías, es decir más movilización, articulación e incidencia política por parte de los sectores marginados. En la medida que movimientos sociales impulsan a tales procesos, actúan como motores de democratización.

Al mismo tiempo, aunque la situación descrita obviamente atenta contra principios básicos de la democracia –como la participación justa y la representación equitativa–, la estabilidad de la democracia en países caracterizados por marcadas desigualdades sociales depende de este equilibrio entre marginación política y falta de capacidad movilizadora (Kurtz 2004; Wolff 2009). Tal equilibrio había sido el resultado de la “doble transformación”, es decir de los procesos simultáneos de democratización política y reestructuración socio-económica:<sup>4</sup> la transición hacia la democracia en la región coincidió con el abandono del modelo ISI (industrialización por sustitución de importaciones). La crisis económica de los años 1980 y las reformas neoliberales acabaron en una subida de las tasas de desempleo y subempleo, en un crecimiento de la pobreza y la economía informal y en una reducción del sector público. Así se debilitó la capacidad movilizadora tanto de los trabajadores oficiales y organizados como de las organizaciones populares en general. La transformación neoliberal del estado –un proceso que comprendió el desmontaje de las instituciones corporativistas y la retirada selectiva del estado de ciertas funciones públicas– también disminuyó los incentivos para la acción colectiva así como la importancia del referente principal de la movilización (el propio estado). Del mismo modo la crisis ideológica de la izquierda después del derrumbe de la Unión Soviética y el discurso tecnocrático del pensamiento neoliberal contribuyeron a esta tendencia despolitizadora. Así, en la fase post-transicional y neoliberal, los sectores populares se caracterizaron por procesos de desmovilización y despolitización que limitaron tanto su participación institucionalizada y su representación política como su capacidad de manifestarse colectivamente afuera de y en contra de las instituciones. El resultado ha sido la “atomización enojada (*angry atomization* en el original inglés, J.W.) de la sociedad” de la cual habló Guillermo O’Donnell (1993: 1365), una situación que se manifestó en el descontento extenso documentado en las encuestas del Latino-barómetro, “interrumpido por estallidos de actividad, a veces violentos, pero generalmente infrecuentes, altamente inorgánicos (aunque

---

4 En torno a esta ambivalencia de la “doble transformación” véase Kurtz (2004), Oxhorn/Starr (1999), Smith/Acuña/Gamarra (1994), Wolff (2005).

normalmente no-espontáneos) y de muy corta duración” (Waisman 1999: 47).

Es esta paradójica combinación entre el empoderamiento formal (a través de la democratización política) y el desempoderamiento fáctico (a través de la crisis y la reestructuración económicas) que ayuda a entender la persistencia del mencionado “triángulo” latinoamericano. En caso contrario, la “lógica movilizadora” de la democracia (Waisman 1999) implicaría que los sectores populares o reivindican sus derechos a través del voto o se rebelan activamente en contra del sistema político. En consecuencia, cuando procesos de movilización social rompen el equilibrio mencionado, el régimen democrático se ve sometido a serias presiones.

### **3. Los movimientos: un breve recorrido**

No es que en la fase después de la transición (o el retorno) a la democracia no hubiera habido movimientos sociales y protesta social en América Latina, pero en general la democratización fue acompañada por una tendencia de desmovilización social (Calderón 1985; Eckstein 2001; Roberts 1997). Sin embargo, alrededor del cambio de siglo fuertes movimientos sociales en diferentes países sudamericanos llamaron la atención: lograron superar los obstáculos a la acción colectiva por parte de sectores marginados, movilizando partes relevantes de los sectores populares para reivindicar mayor presencia e incidencia política. Entre la diversidad de (más o menos) nuevos movimientos sociales (Eckstein/Wickham-Crowley 2003; Johnston/Almeida 2006) destacan tres casos:

- Primero, los “piqueteros”: el movimiento –o el “movimiento de movimientos” (Colectivo Situaciones 2002)– de trabajadores desocupados en Argentina es notable principalmente por dos razones: el gran tamaño del sector informal en las sociedades latinoamericanas y las dificultades estructurales que normalmente impiden la organización de los desempleados (así que Pierre Bourdieu calificó al movimiento de los parados como un “milagro social” [Bourdieu 1998]).
- Segundo, el movimiento indígena ecuatoriano: este movimiento destaca porque representaba en los años 1990 el movimiento indígena –y tal vez el movimiento social– más fuerte de la región

(Yashar 2005: 85; Van Cott 2005: 99) y porque es –a diferencia del caso boliviano– un movimiento netamente indígena que apunta a representar una parte significativa, pero minoritaria de la sociedad ecuatoriana.

- Tercero, el movimiento campesino-indígena en Bolivia: esta confluencia de movimientos y organizaciones sociales obviamente es importante porque representa un caso de éxito excepcional donde –con el gobierno de Evo Morales a partir del 2006– representantes del movimiento logran tomar, dominar y transformar las instituciones políticas (y eso, en general, por vía democrática).

Es por la combinación de semejanzas y diferencias que la comparación de estos tres casos es interesante. Con respecto a la identidad, se compara un movimiento netamente indígena (Ecuador), otro fuertemente indígena, pero con una identidad más amplia (Bolivia) y un tercero sin referencia étnica alguna (Argentina). Con respecto al éxito político, se compara casos en los cuales los movimientos, respectivamente, ocuparon el gobierno (Bolivia), participaron oficialmente, pero muy brevemente en el gobierno (Ecuador) o sólo lograron tener cierta influencia informal en el gobierno (Argentina). Al mismo tiempo, todos los tres movimientos se basaron en procesos de organización y movilización “desde abajo” con fuerte anclaje territorial pero alcance nacional, aglutinaron reivindicaciones materiales específicas con demandas globales por un cambio político y económico estructural, y lograron establecerse –al menos por un tiempo determinado– como representantes reconocidos de sectores social, económico y políticamente marginados a nivel nacional (Wolff 2007).

### 3.1 *El movimiento de trabajadores desocupados de Argentina*<sup>5</sup>

El fenómeno de los piqueteros surge de ciudades petroleras en las cuales la privatización de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) significó no “solo” la pérdida de muchos puestos de trabajo, sino el desmontaje de todo un estado de bienestar paralelo que afectó comunidades locales enteras (Auyero 2004; Svampa/Pe-

5 Sobre el movimiento piquetero véase por ejemplo Colectivo Situaciones (2002); Delamata (2004); Dinerstein (2003); Epstein (2006); Mazzeo (2004); Oviedo (2004); Pacheco (2004); Svampa/Pereyra (2004); Wolff (2007, 2008: Cap. 4).

reyra 2004: 103-151). Según Maristella Svampa y Sebastián Pereyra (2004: 103), los cortes de ruta y las puebladas en Cutral-Co-Plaza Huincul (Neuquén) en 1996 y en General Mosconi-Tartagal (Salta) a partir de 1997 pueden considerarse como las “dos grandes experiencias ‘modelos’” del movimiento piquetero que después se extendió por todo el país: en 1997 ya hubo 170 piquetes en toda Argentina, cifra que subió a 252 (1999), 514 (2000) y 1.383 (2001) para llegar, finalmente, a 2.336 cortes de ruta en el año de crisis abierta (2002) (*Nueva Mayoría* 2005). Fue especialmente el crecimiento de movimientos de trabajadores desocupados en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano bonaerense que implicó la llegada del movimiento piquetero al escenario de la política nacional.

Aunque en el “estallido social” del 19 y 20 de diciembre 2001 no fueron los piqueteros (ni otros grupos organizados), sino más bien los ciudadanos sueltos los protagonistas (Colectivo Situaciones 2003; Dinerstein 2003), la masificación de la protesta social en los años 2001 y 2002 sí fue marcado por los movimientos de trabajadores desocupados como actor (o tipo de actor) más importante (Wolff 2008: 428-429). Por un lado, el alza de protesta social protagonizada por los piqueteros sentó las bases para el “estallido” a finales de diciembre de 2001; por otro lado, después de los días de diciembre, mientras rápidamente perdió fuerza la protesta de la clase media urbana, el movimiento piquetero supo aprovecharse de la debilidad del gobierno interino de Eduardo Duhalde. Los movimientos de trabajadores desocupados, con todas sus divisiones internas, se transformaron en interlocutores indispensables del gobierno nacional y contribuyeron, con su fuerza movilizadora, a la extensión masiva de medidas (planes) sociales a partir del enero 2002. En general, más allá de los pocos días alrededor de diciembre de 2001, el movimiento piquetero se presentó como el único nuevo protagonista de la protesta social con capacidad movilizadora sostenible.

Sin embargo, con la elección de Néstor Kirchner en el 2003 se abrió “un nuevo escenario” para el movimiento piquetero:

La política de Kirchner consistió en poner en acto, simultáneamente, el abanico de estrategias disponibles para integrar, cooptar, disciplinar y/o aislar al conjunto del movimiento piquetero, discriminando entre las diferentes corrientes y organizaciones (Svampa/Pereyra 2004: 212).



Al mismo tiempo, Kirchner recuperó la fuerza tradicional del Peronismo de apelar e incorporar “desde arriba” a los sectores populares e inició una serie de cambios políticos exigidos por la protesta social. Así, y en una situación de recuperación económica después de la crisis, las demandas (y las formas de protesta) de los piqueteros perdieron mucho de su resonancia pública. Como resultado, una parte importante de los movimientos de trabajadores desocupados decidió entrar en cooperación más o menos explícita con el gobierno, mientras que la otra parte que se mantuvo en la oposición se vio cada vez más marginada políticamente. El movimiento piquetero –que siempre había sido un movimiento de movimientos muy heterogéneos– se desintegró en múltiples corrientes, con casi todas las organizaciones dividiéndose en varias partes (Wolff 2007).

### 3.2 *El movimiento indígena de Ecuador*<sup>6</sup>

El movimiento indígena ecuatoriano surge de una nueva dinámica de movilización y organización indígena que se desarrolla en los años 1970 tanto en la Amazonía como en la Sierra ecuatoriana. Estos procesos de organización explícitamente indígena confluyeron en 1986 en la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), confederación nacional que aglutina en su seno a las organizaciones regionales más importantes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.<sup>7</sup> Con el gran “levantamiento indígena” de 1990, la CONAIE apareció en el escenario de la política nacional: provocado por nuevas concesiones para la explotación de petróleo en territorios indígenas, la CONAIE convocó a protestas que incluyeron el bloqueo de carreteras, marchas masivas, la invasión de latifundios y la toma de edificios públicos; en el marco de este levantamiento, la CONAIE por primera vez puso sus reivindicaciones políticas en la agenda nacional. En 1995, la

---

6 Sobre el movimiento indígena ecuatoriano véase por ejemplo Barrera et al. (2004); León Trujillo (1994); Ramírez Gallegos (2009); Selverston-Scher (2001); Van Cott (2005: Cap. 4); Yashar (2005: Cap. 4); Wolff (2007, 2008: Cap. 5); Zamosc (2007).

7 La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Kichua del Ecuador (ECUARUNARI) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE).

CONAIE –junto con otros movimientos rurales y urbanos– decidió crear el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País. A través de Pachakutik se introdujo a las instituciones democráticas: al Congreso Nacional, a las diferentes instituciones políticas a nivel subnacional y, en 1997, a la asamblea constituyente de entonces.

En el marco de la crisis económica en 1999, la CONAIE encabezaba la protesta social contra las medidas de austeridad y ajuste que trataba de imponer el gobierno de Mahuad. Esta escalada de protestas culminó en enero del 2000 con el derrocamiento de Mahuad por una alianza del movimiento indígena con un sector rebelde de las Fuerzas Armadas. Durante unas horas, un “triumvirato de salvación nacional” –incluyendo el presidente de la CONAIE, Antonio Vargas– reemplazaba al presidente elegido. El alto comando militar rápidamente terminó esta rebelión que se había convertido en golpe, pero dos años después retornó aquella alianza indígena-militar: en el 2002 ganó las elecciones presidenciales el ex coronel Lucio Gutiérrez con Pachakutik y CONAIE como sus aliados más importantes. Cuando asumió la presidencia Gutiérrez, el movimiento indígena por primera vez llegó a formar parte del gobierno nacional. Pachakutik era parte de la coalición gobernante; la líder indígena Nina Pacari ocupó la Cancillería y el ex presidente de la CONAIE, Luis Macas, obtuvo el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero la coalición entre CONAIE/Pachakutik y Gutiérrez no duró más que unos pocos meses. Gutiérrez rápidamente empezó a girar el rumbo hacia alianzas con las élites de la Costa, con los partidos políticos de la derecha, con el gobierno de Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional. Hasta fines del año 2003, todos sus aliados de campaña declararon la oposición abierta al gobierno de Gutiérrez: CONAIE y Pachakutik, pero también otros movimientos social urbanos, organizaciones rurales, sindicatos y fuerzas políticas de izquierda en general. Sin embargo, más allá de declaraciones de enfrentamiento radical al “traidor” Gutiérrez, este conjunto de organizaciones sociales no fue capaz de movilizar ningún tipo de resistencia significativa al gobierno. Notablemente, todos los intentos por parte de la CONAIE de iniciar un nuevo levantamiento indígena en contra de Gutiérrez fracasaron.

En los años 1990, como ya se ha mencionado, el movimiento indígena ecuatoriano era considerado como el movimiento étnico más fuerte de América Latina (Van Cott 2005: 99; Yashar 2005: 85). En el marco de un ascenso político espectacular la CONAIE y su “brazo político” Pachakutik se convirtieron en desafiantes serios del sistema establecido, de sus representantes y prácticas tradicionales. En enero del 2000 protagonizaron una rebelión que derrocó al Presidente Jamil Mahuad, en 2003 participaron por unos meses en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Desde la ruptura de la alianza con Gutiérrez, sin embargo, el movimiento indígena entró en una situación de crisis. Se redujo marcadamente no sólo su papel como protagonista de la protesta social sino también su fuerza política dentro de las instituciones democráticas. Así el movimiento indígena no desempeñó ningún papel activo ni en la caída del Presidente Gutiérrez en 2005, ni en la elección de Rafael Correa en 2006, ni durante el primer año del gobierno de Correa en 2007 (Ramírez Gallegos 2009: 89-90; Wolff 2011).

### *3.3 El movimiento campesino-indígena de Bolivia*<sup>8</sup>

Dada la fuerte tradición corporativista en Bolivia, el contemporáneo movimiento social e indígena en este país surge, a diferencia del caso ecuatoriano, en el seno de estructuras sindicales. Pero como en el Ecuador, fueron organizaciones que se identificaron explícitamente como representantes de la población indígena que, a partir de los años 1970, ganaron fuerza y, en los años 1990, protagonizaron la protesta social. Así la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que representa sobre todo a los campesinos indígenas del Altiplano boliviano y surge del movimiento katarista, y las Seis Federaciones del Trópico Cochabambino, que organizan los cocaleros del Chapare, se implantaron como las organizaciones sociales más fuertes del país. Al mismo tiempo, la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) se estableció como representación de la población indígena de las Tierras Bajas y, en 1990, con una larga marcha “por territorio y dignidad” simbólicamente apareció en el escenario nacional (Ströbele-Gregor 1994: 106).

---

<sup>8</sup> Sobre el movimiento indígena-campesino véase por ejemplo Postero (2004); Ströbele-Gregor (1994; 2006); Van Cott (2005: Cap. 3); Yashar (2005: Cap. 5).

Como en el caso ecuatoriano, en los años 1990 empieza, por un lado, un ciclo de protesta social protagonizado por estas organizaciones campesino-indígenas (Crabtree 2005) y se da, por otro lado, un proceso de integración política de estos “nuevos actores” en las instituciones políticas del país (Van Cott 2005: Cap. 3). El actual presidente Evo Morales representa claramente estas dos partes del surgimiento del movimiento indígena-campesino. Morales aparece en la política nacional como líder del movimiento cocalero, un movimiento que surge como organización netamente sindical, pero termina adoptando el discurso y una serie de reivindicaciones explícitamente indígenas. En 1995, y bajo el liderazgo de Evo Morales y los cocaleros, se funda el movimiento político Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) que en 1999 es reemplazado por el Movimiento al Socialismo (MAS). El MAS se define como “instrumento político” de los movimientos sociales y combina un discurso indígena con una agenda más amplia (social-clasista). En contraste, el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), fundado en el 2000 por el líder aymara Felipe Quispe, promueve un discurso exclusivamente indígena. En general, a partir de 1995 las diferentes organizaciones campesino-indígenas logran entrar a las instituciones políticas, tanto a nivel local como a nivel nacional. En el 2002, el MAS y el MIP en conjunto ganan casi un tercio de los escaños en el Congreso Nacional y Evo Morales pierde la elección presidencial en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada solo en la segunda vuelta (en el Congreso).

A partir del 2000 también se agudizan los conflictos sociales, empezando en el 2000 con la “guerra del agua” de Cochabamba y culminando en la “guerra del gas” que, en octubre del 2003, termina anticipadamente con el mandato de Sánchez de Lozada. La combinación de protesta social y auto-integración política desemboca a finales del 2005 en la elección, por mayoría absoluta, de Evo Morales como primer presidente indígena de Bolivia. Morales después inicia un cambio político profundo que incluye tanto una reorientación de las políticas económicas y sociales como una reestructuración del sistema político a través de una Asamblea Constituyente (Ernst/Schmalz 2009).

#### 4. Experiencias, logros y condiciones: cuatro observaciones

En sentido muy general, los tres movimientos sociales han sido capaces de desafiar y desestabilizar a los regímenes democráticos existentes – una desestabilización que fue, a mi modo de ver, necesaria para forzar una apertura política hacia sus representantes y reivindicaciones. Así los piqueteros no sólo pusieron en la agenda política las reivindicaciones urgentes de las víctimas de un modelo económico que se mostró insostenible social y al final también económicamente; además contribuyeron a la apertura forzada de un sistema político que se había vuelto cerrado y alejado de gran parte de la población (Petras/Veltmeyer 2005: 28-59). El movimiento indígena ecuatoriano, por su parte, consiguió su incorporación a un sistema político que, aunque formalmente garantizaba la igualdad política de toda la población, mantuvo fuertes características de exclusión que, en particular, afectaron a la población indígena (Wolff 2011). Como los movimientos sociales en Bolivia, forzaron la apertura –y finalmente el colapso– de una “democracia pactada” que basó su estabilidad y gobernabilidad, entre otras cosas, en un juego de compromisos intra-élites en el cual tres partidos dominantes gobernaron en alianzas cambiantes (Whitehead 2001).

En los tres casos, entonces, el ascenso de “nuevos” sujetos políticos ha conllevado tanto una desestabilización de la democracia (por lo menos temporal) como un impulso importante de democratización. En el marco de la presente contribución no es posible analizar ni comparar estos procesos de movilización, desestabilización e incorporación en detalle.<sup>9</sup> En lo que sigue, se enfoca más bien la situación actual con el propósito de identificar algunas conclusiones con respecto a logros (y fracasos o límites) en términos de democratizar la democracia. Comparando los efectos de los tres movimientos sociales en la democracia en los países correspondientes, quiero poner a debate cuatro observaciones:

(1) Sidney Tarrow, en su libro *Power in Movement*, argumentó que, bajo condiciones democráticas, el resultado más probable de movimientos sociales exitosos es un ciclo de reformas (Tarrow 1998: 161).

---

9 Para un intento de hacer esto véase Wolff (2007; 2008).

Según Tarrow, este resultado es independiente del hecho de que, con frecuencia, movimientos sociales fuertes no apuntan a tales reformas limitadas, sino a un cambio social profundo o incluso a una subversión total del orden social. Ahora, en términos muy generales los tres casos confirman el argumento. Pero la experiencia boliviana sobrepasa la idea detrás de la imagen del “ciclo de reformas”. La noción de una “revolución democrática” sí tiene una base real en la transformación actual de Bolivia (Ernst/Schmalz 2009; *Nueva Sociedad* 2007). Sin poder entrar en una evaluación de esta transformación, parece claro que el ascenso político de los movimientos sociales e indígenas alrededor del MAS, el gobierno de Evo Morales y el proceso constituyente han contribuido a una clara ampliación de la democracia en términos de representatividad, responsividad y participatividad. Eso incluye una importante “sustancialización” de la democracia, en el sentido que creció, de manera significativa, la idea de que en procesos democráticos se decide sobre cosas políticamente sustanciales.<sup>10</sup>

Así, el caso boliviano es algo muy especial. Depende de circunstancias que un movimiento social normalmente no tiene:

- El estatus mayoritario de la población indígena en combinación con su historia de discriminación y marginación;
- el papel de EEUU y de la lucha contra las drogas en combinación con la relevancia económica y simbólica de la hoja de coca;
- los resultados de las reformas neoliberales en combinación con el potencial económico del gas;
- la incapacidad de las élites políticas de abrir sustancialmente al sistema de “democracia pactada” para dar respuestas a las nuevas demandas en combinación con los procesos de apertura institucional por vía de reformas políticas (como las leyes de descentralización y participación popular de los años 90);
- la fuerza tradicional de las organizaciones sociales y sus estructuras de movilización existentes en combinación con las nuevas dinámicas de movilización indígena y el liderazgo de Evo Morales.

---

10 Obviamente eso no quiere decir que no haya también tensiones y conflictos entre el gobierno del MAS y los movimientos sociales en general e indígenas en particular (cf. Stefanoni 2009: 103-104).

(2) A diferencia de este caso tan particular, las experiencias en Argentina y Ecuador demuestran una dinámica diferente, y probablemente la dinámica normal: para un movimiento social, entrar como fuerza minoritaria en procesos e instituciones políticos para transformar las reglas de juego conlleva el gran riesgo de que las reglas de juego más bien transformen al movimiento y sus representantes.

Esa tendencia se puede observar claramente en el caso de las organizaciones piqueteras que entran en cooperación con el estado – y, en concreto, con el gobierno: lógicas clientelares, procesos de cooptación política, relaciones jerárquicas y la manipulación de la base social desde arriba tienden a sobreponerse sobre lógicas más participativas, horizontales y democráticas que al menos constituyeron una dimensión importante del movimiento piquetero original. Aquellas organizaciones piqueteras que se opusieron a la participación en este juego político, perdieron fuerza y, por regla general, se retiraron al nivel local enfatizando un “trabajo territorial” (Blank 2009) que puede ser muy interesante en varios términos, pero que tiene una relevancia muy limitada para la política nacional. En el nivel del estado central, lo que hubo como “profundización” de la democracia en Argentina propulsada por la protesta social, es decir la mejora en términos de responsividad, representatividad, participación y control institucional,<sup>11</sup> quedó, en gran parte, en un cambio coyuntural e informal que dependía de la habilidad y la buena voluntad del Presidente Kirchner. Los efectos más estructurales se dieron en el área de derechos humanos –con respecto a las violaciones de derechos humanos bajo la dictadura militar–, es decir en un campo que no tenía mucho que ver con las reivindicaciones piqueteras.<sup>12</sup> El

---

11 Con respecto a responsividad y representatividad, el Presidente Néstor Kirchner, durante todo su mandato, respondió claramente a demandas importantes de una gran mayoría del electorado y era visto por mayorías abrumadoras de la población como un representante creíble de sus intereses. En términos de participación, Kirchner (y ya su antecesor Eduardo Duhalde) se abrió al diálogo con muchos sectores de la sociedad. Y en términos de control institucional, Kirchner inició un par de reformas (limitadas) con vista a despolitizar la Corte Suprema y recuperar ciertas competencias parlamentarias (en el control de decretos ejecutivos).

12 Obviamente las reivindicaciones de los piqueteros tenían mucho que ver con derechos humanos en un sentido más amplio que incluye derechos económicos y sociales. Sin embargo, las iniciativas del gobierno de Kirchner en cuanto a los

movimiento de trabajadores desocupados contribuyó a la ampliación de políticas sociales durante los gobiernos de Duhalde y Kirchner, forzó el reconocimiento político de las organizaciones piqueteras (es decir, su inclusión como interlocutor oficial del gobierno) y –en parte– logró ser incorporado con propios representantes al gobierno. Pero estos éxitos eran más concesiones informales y coyunturales que derechos conquistados, así que su durabilidad dependía de alianzas variables, lazos personales y una continua fuerza movilizadora por parte del movimiento piquetero.

En el caso del movimiento indígena ecuatoriano la balanza es un poco más complicada. En comparación con el movimiento de desempleados en Argentina, el de los indígenas en el Ecuador se caracteriza por una propia fuerza mayor: es más homogéneo (en términos relativos), más anclado en comunidades locales, tiene reivindicaciones más coherentes y una trayectoria de más larga data. Por consiguiente, el movimiento indígena, durante todo el ciclo de movilización, ha logrado unos cambios estructurales muy importantes: respecto al reconocimiento del movimiento como actor político, a su representación política, al reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas con sus derechos específicos. Estos logros han sido institucionalizados y, en parte, hasta constitucionalizados, así que su vigencia y durabilidad no dependen de una continua movilización indígena.<sup>13</sup>

Sin embargo, la experiencia de la participación política directa del movimiento indígena ecuatoriano (sobre todo en el gobierno de Lucio Gutiérrez) confirma el problema de adaptación inversa. Con la entrada al juego político, desde el inicio, surgieron clivajes entre dirección y base dentro de cada una de las organizaciones y se agravaron los conflictos de competencia entre las diferentes organizaciones. Al

---

crímenes estatales durante las dictaduras militares entre 1976 y 1983 se referían a los derechos humanos en un sentido más estrecho de derechos civiles básicos.

- 13 Ejemplos importantes incluyen la participación en instancias legislativas y ejecutivas en todos los niveles del estado a través del partido Pachakutik (y, en este momento, dentro del partido oficialista Alianza PAIS [Patria Altiva y Soberana]); el establecimiento de instituciones estatales explícitamente dedicadas a reivindicaciones indígenas (como la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas y el Consejo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador); y la inclusión de derechos (colectivos) indígenas en las constituciones de 1998 y de 2008.



mismo tiempo, la apertura política fue acompañada por estrategias estatales que apuntaban a profundizar estas tensiones a través de la cooptación focalizada de líderes y segmentos del movimiento indígena. Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez se intensificaron ambos procesos: la decepción por la participación fracasada en el gobierno potenció las dinámicas internas de debilitamiento y división. Y el presidente las empujó con más recursos y más habilidades que sus predecesores. Con sus ofertas clientelistas Gutiérrez se aprovechó tanto del distanciamiento entre dirección y base como de la fragmentación del mapa organizativo del movimiento ecuatoriano: incorporó representantes de diversas organizaciones indígenas al gobierno y a través del aparato estatal –especialmente a través de diversos programas sociales e inversiones en proyectos de infraestructura local, pero también a través de su partido Sociedad Patriótica–, consolidó redes clientelares hacia el nivel local para “disputarle al movimiento indígena su centro fundamental: las comunidades” (Dávalos 2005: 62).

(3) Comparando las actuales transformaciones políticas en Ecuador –bajo el gobierno de Rafael Correa– y en Bolivia –a partir de la primera elección de Evo Morales– con los cambios políticos que efectuaron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, surge una tercera observación: parece que cierta ruptura institucional es necesaria para abrir posibilidades de cambios políticos que sean más estructurales.

Lo que caracteriza en Argentina el tratamiento de la crisis social y política a partir del 2001 es el intento –muy exitoso– por parte de los gobiernos de turno de evitar todo tipo de cambio político-institucional que sea más que adaptaciones muy específicas controladas desde arriba. Como ya se ha mencionado, Néstor Kirchner como presidente absorbió una parte importante de las reivindicaciones de la protesta social – y absorbió también una parte importante de la estructura del movimiento piquetero. Pero lo hizo manteniendo casi todas las estructuras y lógicas político-institucionales preexistentes (Arzadún 2008; Wolff 2008: 167-180).

En el caso ecuatoriano se puede comparar las dos experiencias de Lucio Gutiérrez y Rafael Correa. Gutiérrez, elegido con base en una alianza y una agenda de cambio político (si bien ambivalente), deci-

dió mantenerse dentro del margen de las instituciones establecidas y respetó las correlaciones de fuerzas fijadas institucionalmente; así desde el inicio de su presidencia rompió con todas las promesas de su campaña presidencial y rompió sus acuerdos con el movimiento indígena (Barrera et al. 2004; Lucas 2003). En contraste, Rafael Correa desde el inicio anunció y tomó otro rumbo: decidió romper con las instituciones establecidas y en concreto con el poder de los partidos establecidos con su poder de veto (la llamada “partido-cracia”); el mecanismo elegido fue la Asamblea Constituyente “de plenos poderes” que suspendió y, en la fase de transición después de la aprobación de la nueva constitución, temporalmente sustituyó al Congreso (Ospina Peralta 2009). El resultado hasta ahora puede no ser muy fácil de evaluar, pero al menos abrió un camino hacia cambios políticos profundos que corresponden, en una parte importante, a las reivindicaciones del movimiento indígena (Wolff 2010). Entonces quedan muchas preguntas respecto a las perspectivas de la “revolución ciudadana” proclamada por Rafael Correa, pero es difícil pensar en un camino alternativo que hubiera respetado la capacidad de veto del Congreso y así de los partidos establecidos sin abandonar toda la idea de un cambio político real. Que el movimiento indígena tiene una posición muy ambivalente respecto a este proceso de cambio y una relación muy complicada (y con muchas tensiones y conflictos) con el gobierno de Correa, es otra historia (Kaltmeier 2010: 5-6; Simbaña 2010).

En Bolivia la Asamblea Constituyente y la nueva constitución sin ninguna duda constituyen elementos cruciales del proceso de “refundar Bolivia” promovido por el gobierno de Evo Morales (Ernst/Schmalz 2009; Stefanoni 2009). Aunque la idea de un “gobierno de los movimientos sociales” conlleva tensiones importantes –por ejemplo “entre el mando-obediencia estatal y la acción colectiva sindical” (Stefanoni 2009: 104)–, en términos relativos los movimientos campesino-indígenas bajo el gobierno de Evo Morales gozan de un acceso, una participación y una responsividad política bastante excepcional: tanto en comparación temporal con el status quo como en comparación espacial con otros países de la región (y del mundo). Sin embargo, una pregunta abierta es si realmente era necesaria tal ruptura institucional para lograr los cambios conseguidos. Aún así –con la elección de una Asamblea Constituyente– el gobierno y las

fuerzas oficialistas tuvieron que negociar con la oposición todos los pasos importantes del cambio constitucional; la última revisión de la propuesta de nueva constitución, al final, la hizo el propio (viejo) Congreso con mayoría de dos tercios (Romero/Böhrt/Pñaranda 2009). A diferencia de Ecuador, en el caso boliviano parece que la importancia del proceso constituyente está más en el nivel simbólico (un nivel ya de por sí muy importante) – en términos de refundar un nuevo estado plurinacional que se constituye, por fin, bajo el protagonismo de la mayoría indígena (Vega 2009).

Pero tanto Bolivia como Ecuador demuestran también otra cosa: si bien la ruptura institucional abre posibilidades hacia una profundización de la democracia, tal camino es solo una posibilidad. La desestabilización y transformación de la institucionalidad democrática también puede provocar reacciones no democráticas y violentas por parte de los perdedores de tal transformación, o puede facilitar mecanismos de gobernación cada vez más autoritarios. Desde la perspectiva de los movimientos sociales, el problema es que, como movimientos sociales, su papel es desafiar a las instituciones (y no reforzarlas), pero para lograr una profundización de la democracia que no sea sólo coyuntural se necesita instituciones fuertes y con relativa autonomía de las correlaciones de fuerza sociales.

(4) Una cuarta observación que surge de la comparación del cambio político en los tres países no es muy agradable, ni desde la perspectiva de los movimientos sociales en particular, ni desde una perspectiva democrática en general. La observación se refiere a la importancia de líderes fuertes, líderes que son capaces de unir a movimientos, organizaciones y grupos sociales siempre heterogéneas bajo un proyecto político que depende, en gran medida, de la persona del líder y su credibilidad. Esta observación no se refiere solo al papel decisivo de Evo Morales, Rafael Correa y Nestór Kirchner en los distintos procesos de cambio político, es decir a los jefes de estado. También a nivel de los propios movimientos sociales destaca la importancia de representantes individuales. Dentro de los diferentes movimientos sociales puede haber mecanismos de participación, delegación y control social, pero su papel político a nivel nacional depende, en gran medida, de líderes fuertes que se manejen bien tanto en la esfera pública como en el ámbito político, que den dirección

política y presencia nacional a la organización correspondiente. Así todos –el movimiento indígena ecuatoriano con Luis Macas, Antonio Vargas y otros, el movimiento campesino-indígena boliviano con Evo Morales y Felipe Quispe y las grandes organizaciones piqueteras en Argentina con Luis D’Elía o Juan Carlos Alderete– tienen sus “líderes históricos” y jefes eternos (normalmente, pero no sólo hombres).

### 5. Preguntas a modo de conclusión

Cerrando este recorrido por la experiencia de tres movimientos sociales en América del Sur, se puede concluir que la problemática de las “escalas de justicia” en el doble sentido propuesto por Nancy Fraser (2009) atraviesa los tres movimientos tratados. Si se interpreta las reivindicaciones de los tres movimientos como demandas de justicia, la tipología de Fraser nos da –a modo de conclusión– una serie de preguntas importantes así como una sistemática para analizar las demandas y los éxitos de los movimientos sociales:

Por un lado, está muy presente (y difícil de tratar) la problemática de la sustancia –el *qué*– de la justicia.<sup>14</sup> ¿Cómo combinar las reivindicaciones de redistribución, representación y reconocimiento en una agenda y estrategia política coherente? ¿Cómo evitar, por ejemplo, que respuestas estatales de corto plazo, que satisfacen ciertas demandas de redistribución, logren desactivar reivindicaciones de tipo más estructural? ¿Cómo impedir que cierto reconocimiento global quede en lo simbólico sin consecuencias en términos de representación y redistribución? ¿Y cómo minimizar el riesgo de que una mayor representación política termine siendo un fin en sí? Finalmente, si se logra iniciar una transformación política profunda (como en el caso boliviano), la gran pregunta es cómo conciliar demandas de justicia tan heterogéneas: reivindicaciones que se refieren a dimensiones y principios de justicia muy diferentes.<sup>15</sup> En términos de respuestas globales, se podría decir que los movimientos indígenas en

14 En *Scales of Justice*, Fraser distingue tres dimensiones sustanciales de justicia: redistribución, reconocimiento y representación.

15 Así, con respecto a las demandas indígenas, una pregunta importante (y no resuelta) se refiere a la relación entre reivindicaciones basadas en derechos individuales de tipo liberal y reivindicaciones colectivas de tipo cultural (Feldt/Ströbele-Gregor 2009: 15-16).

Bolivia y Ecuador tuvieron éxitos impresionantes en cuanto a reconocimiento, consiguieron bastante respecto a su representación (aunque con cierto retroceso actual en Ecuador), pero alcanzaron hasta ahora muy poco en términos de redistribuir recursos económicos. Los movimientos piqueteros en Argentina, al contrario, lograron cierta redistribución de recursos (aunque de manera bastante limitada), pero en cuanto a reconocimiento y representación sus éxitos han sido muy temporales e informales.

Por otro lado, la problemática de las “escalas de justicia” según Fraser se refiere al nivel adecuado (en términos geográficos) hacia donde dirigir las reivindicaciones, el marco adecuado donde tratarlas. Los tres movimientos surgen del nivel local y tienen su fuerza por el anclaje en las comunidades locales. Por consiguiente, una serie de reivindicaciones importantes tiene como marco de referencia el ámbito local: por ejemplo, la demanda de autonomía y auto-gobierno indígena, pero también la demanda de autonomía y autogestión en el caso de “proyectos productivos” del movimiento piquetero (Wolff 2007: 9-18). Pero al mismo tiempo el marco principal al cual se refieren los movimientos sociales es el estado-nación, aunque también incluyen reivindicaciones que tienen que ver con estructuras transnacionales de gobernación (y se dirigen a actores como el Fondo Monetario Internacional o el gobierno de EEUU). Por este lado también entra una serie de problemas: ¿Cómo conciliar las demandas de autonomía local con las reivindicaciones nacionales? ¿Cómo evitar que respuestas puntuales a reivindicaciones locales logren desactivar la demanda por un cambio político más estructural? ¿Cómo impulsar el tratamiento de las reivindicaciones al nivel del estado-nación sin contribuir al refortalecimiento de un estado centralista que contradice la intención democratizadora en general y las demandas de autonomía en particular? Y al revés: ¿Cómo luchar por autonomía y reivindicaciones locales sin socavar las capacidades del estado-nación que son imprescindibles para tratar la mayoría de las reivindicaciones? Otra vez en términos de respuestas tentativas, se podría concluir que los movimientos indígena-campesinos en Bolivia lograron articular demandas locales, nacionales e internacionales. Por consiguiente, sus éxitos son mayores en todos los niveles, aunque incluso en Bolivia son siempre éxitos ambivalentes: por ejemplo, hay tensiones importantes entre el gobierno de Evo Morales —que se

autodfine como gobierno de los movimientos sociales– y las organizaciones indígenas más importantes. Sin embargo, el movimiento indígena ecuatoriano y los piqueteros argentinos tenían muchos más problemas en desarrollar y mantener una posición coherente en cuanto a articular sus demandas políticas generales con sus diversas reivindicaciones particulares – una situación que les hizo muy vulnerables frente a estrategias clientelares de cooptación y división.

Este artículo termina, lamentablemente, con más preguntas que respuestas. Pero –y no sólo para tener una excusa elegante– se puede decir que terminar con preguntas en vez de respuestas es adecuado para el tema ya que la democratización de la democracia es un proceso de búsqueda abierta. Y en tal búsqueda probablemente el papel más importante de los movimientos sociales es poner en el tapete temas, demandas y preguntas cruciales – las respuestas, a fin de cuentas, sólo pueden surgir de los procesos empíricos de interacción, lucha y transformación política.

### Bibliografía

- Arzadún, Daniel (2008): *El peronismo: Kirchner y la conquista del reino. Análisis de la reconfiguración de las relaciones de poder en el interior del Partido Justicialista Nacional durante el gobierno de Néstor Kirchner*. Buenos Aires: Sudamericana/COPPPAL.
- Auyero, Javier (2004): “The Moral Politics of Argentine Crowds”. En: *Mobilization*, 9, 3, pp. 311-326.
- Barrera, Augusto et al. (2004): *Entre la utopía y el desencanto. Pachakutik en el gobierno de Gutiérrez*. Quito: Editorial Planeta.
- Blank, Martina (2009): *Zwischen Protest und trabajo territorial. Soziale Bewegungen in Argentinien auf der Suche nach anderen Räumen*. Berlin: Tranvía.
- Bourdieu, Pierre (1998): “Die Arbeitslosenbewegung – ein gesellschaftliches Wunder”. En: Bourdieu, Pierre: *Gegenfeuer. Wortmeldungen im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale Globalisierung*. Konstanz: UVK, pp. 103-105.
- Calderón, Fernando (ed.) (1985): *Los movimientos sociales ante la crisis*. Buenos Aires: Universidad de las Naciones Unidas.
- Colectivo Situaciones (2002): “Multiplicidad y contrapoder en la experiencia piquetera”. En: MTD de Solano/Colectivo Situaciones (eds.): *La Hipótesis 891. Más allá de los piquetes*. Buenos Aires: Ediciones De mano en mano, pp. 117-140.

- (2003): “Der 19. und 20. Dezember: Ein Aufstand neuen Typs”. En: Brand, Ulrich (ed.): *¡Que se vayan todos! Krise und Widerstand in Argentinien*. Berlin: Assoziation A, pp. 27-51.
- Crabtree, John (2005): *Patterns of Protest. Politics and Social Movements in Bolivia*. London: Latin America Bureau.
- Dahl, Robert A. (1989): *Democracy and its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Dávalos, Pablo (2005): “Ecuador: Plan Colombia, crisis institucional y movimientos sociales”. En: *Revista OSAL (Observatorio Social de América Latina)*, 6, 18, pp. 57-67.
- Delamata, Gabriela (2004): “The Organizations of Unemployed Workers in Greater Buenos Aires” (*CLAS – Center for Latin American Studies; Working Paper no. 8*) (<www.clas.berkeley.edu:7001/Publications>; 18.11.2004).
- Dinerstein, Ana C. (2003): “Power or Counter Power? The Dilemma of the Piquetero Movement in Argentina Post-crisis”. En: *Capital & Class*, 81, pp. 1-8.
- Eckstein, Susan (ed.) (2001): *Power and Popular Protest. Latin American Social Movements* (updated and expanded edition). Berkeley: University of California Press.
- Eckstein, Susan Eva/Wickham-Crowley, Timothy P. (eds.) (2003): *What Justice? Whose Justice? Fighting for Fairness in Latin America*. Berkeley: University of California Press.
- Epstein, Edward (2006): “The Piquetero Movement in Greater Buenos Aires: Political Protests by the Unemployed Poor During the Crisis”. En: Epstein, Edward/Pion-Berlin, David (eds.): *Broken Promises? The Argentine Crisis and Argentine Democracy*. Lanham: Lexington, pp. 95-115.
- Ernst, Tanja/Schmalz, Stefan (eds.) (2009): *Die Neugründung Boliviens? Die Regierung Evo Morales*. Baden-Baden: Nomos.
- Feldt, Heidi/Ströbele-Gregor, Juliana (2009): *Indigene Völker und Konflikt. Stärkung indigener Organisationen in Lateinamerika*. Eschborn: GTZ.
- Fraser, Nancy (2009): *Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World*. New York: Columbia University Press.
- Huntington, Samuel P. (1991): *The Third Wave. Democratization in the Late 20th Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Johnston, Hank/Almeida, Paul (eds.) (2006): *Latin American Social Movements. Globalization, Democratization, and Transnational Networks*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Kaltmeier, Olaf (2010): “Educación intercultural, políticas de identidad y ciudadanía”. En: Ströbele-Gregor, Juliana/Kaltmeier, Olaf/Giebeler, Cornelia (eds.): *Construyendo Interculturalidad: Pueblos Indígenas, Educación y Políticas de Identidad en América Latina*. Eschborn: GTZ, pp. 3-8.
- Kurtz, Marcus J. (2004): “The Dilemmas of Democracy in the Open Economy. Lessons from Latin America”. En: *World Politics*, 56, 1, pp. 262-302.
- León Trujillo, Jorge (1994): *De campesinos a ciudadanos diferentes. El levantamiento indígena*. Quito: Abya-Yala.

- Lindblom, Charles E. (1977): *Politics and Markets. The World's Political-Economic Systems*. New York: Basic Books.
- Lucas, Kintto (2003): *El movimiento indígena y las acrobacias del Coronel*. Quito: Tinají.
- Mazzeo, Migue (2004): *Piqueteros. Notas para una tipología*. Buenos Aires: Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas.
- Nueva Mayoría (2005): "El 2005 está mostrando el mayor nivel mensual de cortes de rutas y vías públicas desde 2003". En: *Nueva Mayoría.com*, 17.08.2005 (<www.nuevamayoria.com>; 02.09.2005).
- Ocampo, José Antonio (2002): "Media década perdida". En: *El País*, 25.08.2002 (<www.elpais.com>; 04.03.2010).
- O'Donnell, Guillermo (1993): "On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Postcommunist Countries". En: *World Development*, 21, 8, pp. 1355-1369.
- Offe, Claus/Wiesenthal, Helmut (1980): "Two Logics of Collective Action: Theoretical Notes on Social Class and Organizational Form". En: Zeitlin, Maurice (ed.): *Political Power and Social Theory. A Research Annual*, 1, pp. 67-115.
- Ospina Peralta, Pablo (2009): "Transiciones. Ecuador después del referéndum". En: *CEP (Comité Ecuménico de Proyectos) Análisis de Coyuntura* (<www.cepecuador.org>; 19.08.2009).
- Oviedo, Luis (2004): *Una historia del movimiento piquetero. De las primeras coordinadoras al Argentinazo*. Buenos Aires: Ediciones Rumbos.
- Oxhorn, Philip (2003): "Social Inequality, Civil Society, and the Limits of Citizenship in Latin America". En: Eckstein, Susan Eva/Wickham-Crowley, Timothy P. (eds.): *What Justice? Whose Justice? Fighting for Fairness in Latin America*. Berkeley: University of California Press, pp. 35-63.
- Oxhorn, Philip/Starr, Pamela K. (eds.) (1999): *Markets and Democracy in Latin America. Conflict or Convergence?* Boulder: Lynne Rienner.
- Pacheco, Mariano (2004): *Del piquete al movimiento. Parte 1: de los orígenes al 20 de diciembre de 2001*. Buenos Aires: Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (Cuadernos de la FISyP, no. 11).
- Petras, James/Veltmeyer, Henry (2005): *Social Movements and State Power. Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador*. London: Pluto Press.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2004): *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*. Buenos Aires: Alfaguara.
- Postero, Nancy (2004): "Articulations and Fragmentations: Indigenous Politics in Bolivia". En: Postero, Nancy/Zamosc, Leon (eds.): *The Struggle for Indigenous Rights in Latin America*. Brighton: Sussex Academic Press, pp. 189-216.
- Ramírez Gallegos, Franklin (2009): "El movimiento indígena y la reconstrucción de la izquierda en Ecuador: el caso del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País". En: Ospina, Pablo/Kaltmeier, Olaf/Büschges, Olaf (eds.): *Los Andes en movimiento. Identidad y poder en el nuevo paisaje político*. Quito: Corporación Editora Nacional, pp. 65-94.



- Remmer, Karen L. (1990): "Democracy and Economic Crisis: The Latin American Experience". En: *World Politics*, 42, 3, pp. 315-335.
- Roberts, Kenneth M. (1997): "Beyond Romanticism: Social Movements and the Study of Political Change in Latin America". En: *Latin American Research Review*, 32, 2, pp. 137-151.
- Romero, Carlos/Böhr, Carlos/Pañaranda, Raúl (2009): *Del conflicto al diálogo. Memorias del acuerdo constitucional*. Quito: FBDM/FES-ILDIS.
- Selverston-Scher, Melina (2001): *Ethnopolitics in Ecuador. Indigenous Rights and the Strengthening of Democracy*. Coral Gables: North-South Center Press.
- Simbaña, Floresmilo (2010): "Las relaciones entre el movimiento indígena y el gobierno". En: *La Tendencia*, 10, pp. 43-47.
- Smith, William C./Acuña, Carlos H./Gamarra, Eduardo A. (eds.) (1994): *Latin American Political Economy in the Age of Neoliberal Reform. Theoretical and Comparative Perspectives for the 1990s*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Stefanoni, Pablo (2009): "Indianismo y nacionalismo revolucionario: un análisis del gobierno de Evo Morales". En: Ospina, Pablo/Kaltmeier, Olaf/Büschges, Olaf (eds.): *Los Andes en movimiento. Identidad y poder en el nuevo paisaje político*. Quito: Corporación Editora Nacional, pp. 95-106.
- Strasser, Carlos (2000): *Democracia & Desigualdad. Sobre la "democracia real" a fines del siglo XX*. Buenos Aires: CLACSO.
- Ströbele-Gregor, Juliana (1994): "From Indio to Mestizo...to Indio: New Indianist Movements in Bolivia". En: *Latin American Perspectives*, 21, 2, pp. 106-123.
- (2006): "Für ein anderes Bolivien – aber für welches? Indigene Völker und Staat in Bolivien". En: Bopp, Franziska/Ismar, Georg (eds.): *Bolivien. Neue Wege und alte Gegensätze*. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag, pp. 279-326.
- Svampa, Maristella/Pereyra, Sebastián (2004): *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteros*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Tarrow, Sidney (1998): *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Van Cott, Donna Lee (2005): *From Movements to Parties in Latin America. The Evolution of Ethnic Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Varios Autores (2007): "Bolivia: ¿el fin del enredo?". Tema Central en: *Nueva Sociedad*, 209, pp. 31-172.
- Vega, Oscar (2009): "Wege zum guten Leben. Der bolivianische Verfassungsgebungsprozess". En: Ernst, Tanja/Schmalz, Stefan (eds.): *Die Neugründung Bolivians? Die Regierung Evo Morales*. Baden-Baden: Nomos, pp. 17-31.
- Waisman, Carlos H. (1999): "Civil Society, State Capacity, and the Conflicting Logics of Economic and Political Change". En: Oxhorn, Philip/Starr, Pamela K. (eds.): *Markets and Democracy in Latin America. Conflict or Convergence?* Boulder: Lynne Rienner, pp. 43-59.
- Whitehead, Laurence (2001): "Bolivia and the Viability of Democracy". En: *Journal of Democracy*, 12, 1, pp. 6-16.

- Wolff, Jonas (2005): "Ambivalent Consequences of Social Exclusion for Real-existing Democracy in Latin America: the Example of the Argentine Crisis". En: *Journal of International Relations and Development*, 8, 1, pp. 58-87.
- (2007): "(De-)Mobilising the Marginalised. A Comparison of the Argentine Piqueteros and Ecuador's Indigenous Movement". En: *Journal of Latin American Studies*, 39, 1, pp. 1-29.
- (2008): *Turbulente Stabilität. Die Demokratie in Südamerika diesseits ferner Ideale*. Baden-Baden: Nomos.
- (2009): "De-Idealizing the Democratic Civil Peace: On the Political Economy of Democratic Stabilisation and Pacification in Argentina and Ecuador". En: *Democratization*, 16, 5, pp. 998-1026.
- (2010): *Elitenwandel in Ecuador. Soziopolitische Akteure und politische Perspektiven*. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- (2011): "Del gobierno a la crisis. Acerca del debilitamiento del movimiento indígena ecuatoriano". En: Büschges, Christian/Kaltmeier, Olaf/ Thies, Sebastian (eds.): *Las culturas políticas en la región andina*. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, pp. 281-295.
- Yashar, Deborah J. (2005): *Contesting Citizenship in Latin America. The Rise of Indigenous Movements and the Postliberal Challenge*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zamosc, Leon (2007): "The Indian Movement and Political Democracy in Ecuador". En: *Latin American Politics & Society*, 49, 3, pp. 1-34.